

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN



SALA LABORAL

Medellín, veintiséis (26) de enero de dos mil veintitrés (2023)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, conformada por los Magistrados Jaime Alberto Aristizábal Gómez, quien actúa como ponente, Francisco Arango Torres y John Jairo Acosta Pérez, procede dentro del proceso ordinario con radicado número 05001-31-05-006-2015-00779-02, promovido por OSCAR DE JESÚS GÓMEZ MARULANDA contra **i) CONSTRUCTORA MANGLARES S.A.S.**, y **ii) RUBÉN DARIO DIAZ DIAZ**, a resolver el recurso de apelación presentado por el apoderado de la parte demandada, contra la sentencia condenatoria emitida el 26 de julio de 2016 por el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Medellín.

De conformidad con el numeral 1° del artículo 13 de la Ley 2213 de 13 de junio de 2022 “...Por medio de la cual se establece la vigencia permanente del Decreto Legislativo 806 de 2020 y se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia y se dictan otras disposiciones...”, se toma la decisión correspondiente mediante

providencia escrita número **002 de 2023**, previamente discutida y aprobada por los integrantes de la Sala.

ANTECEDENTES

Mediante acción judicial, el demandante pretende se declare que entre él y los demandados existió un contrato de trabajo del 23 de diciembre de 2013 al 2 de febrero de 2014, y que en consecuencia se les condene conjunta, separada o solidariamente a pagarle prestaciones sociales, vacaciones, indemnización moratoria, indexación y costas.

Para fundamentar sus pretensiones expuso que prestó sus servicios personales a los demandados mediante contrato verbal a término indefinido, en la construcción del edificio Roma, desempeñándose como oficial de construcción desde el 23 de diciembre de 2013 al 2 de febrero de 2014, con un salario mensual de \$1.120.500. La causa de terminación del vínculo fue voluntario y no se le pagaron prestaciones sociales, ni vacaciones.

La demanda **fue admitida en auto del 14 de agosto de 2015**. Notificados los demandados aceptaron la relación laboral y negaron el salario. Se oponen a las prestaciones argumentando que las prestaciones sociales estuvieron a disposición del demandante quien no las cobró.

En **sentencia del 26 de julio de 2016**, el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Medellín, condenó a los demandados a pagar al demandante individual, conjunta o solidariamente, la suma de \$22.335.300 como sanción moratoria por no pago oportuno de prestaciones sociales a la terminación del contrato de trabajo. Para cumplir con ello tendrá un plazo de 15 días hábiles a partir de que quede en firme la sentencia, de no hacerlo pagará sobre el valor adeudado como sanción moratoria, intereses moratorios comerciales. Condenó en costas a ambos demandados, fijando agencias en \$2.000.000.

RECURSO DE APELACIÓN

Fue presentado por la parte demandada indicando que existen precedentes jurisprudenciales donde indican que la mala fe tiene que ser probada. Añade que en el expediente consta que no hubo mala fe en la consignación o en el no pago oportuno de las prestaciones sociales al demandante.

No se tendrán en cuenta los alegatos de conclusión de la parte demandante al ser presentados extemporáneamente, pues el auto que corrió traslado para alegar fue notificado por estados 195 del 28 de octubre de 2022, y estos fueron presentados el 16 de noviembre de 2022.

PROBLEMA JURÍDICO

Consiste en establecer si al señor Oscar de Jesús Gómez Marulanda le asiste derecho a la indemnización moratoria del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, por el no pago oportuno de sus prestaciones sociales, o si por el contrario, se encuentra acreditada la buena del empleador en tal omisión.

CONSIDERACIONES

Frente al recurso promovido, la competencia de esta Corporación está dada por los puntos que son objeto de apelación, de conformidad los Arts. 15 y 66A del C.P.L y de la S.S., respectivamente.

En este caso, no es objeto de controversia que el demandante laboró para los demandados del 23 de diciembre de 2013 al 2 de febrero de 2014, el contrato fue verbal a término indefinido para desempeñar el cargo de oficial de construcción en

la obra Edificio Roma, y el vínculo laboral terminó voluntariamente. Así lo aceptaron los demandados al dar respuesta a los hechos de la demanda.

Es objeto de ataque en recurso de alzada la condena a los demandados, en primera instancia, a pagar al demandante, de manera individual, conjunta o solidariamente, la suma de \$22.335.300 como sanción moratoria por no pago oportuno de prestaciones sociales a la terminación del contrato de trabajo, pues evidenció la mala fe de los empleadores demandados en la ejecución del contrato y dentro del trámite procesal.

En relación con la sanción moratoria del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, la jurisprudencia de la H. CSJ¹ ha sostenido de manera reiterada y pacífica que no es de aplicación automática e inexorable, sino que debe analizarse en cada caso en particular el actuar del empleador a fin de determinar si este, estuvo desprovisto o no de la buena fe que debe regir por regla general en los contratos de trabajo. La buena fe equivale a obrar con lealtad, rectitud y honestidad, es decir, se traduce en el actuar sincero con suficiente probidad y honradez del empleador frente al trabajador, a quien en ningún momento quiso cercenar sus derechos, lo cual está en contraposición con la mala fe, de quien pretende obtener ventajas o beneficios sin una suficiente dosis de integridad o pulcritud.

Para esta superioridad resulta claro que no basta la afirmación del demandado, en el sentido de indicar que su actuar se encuentra dentro de los postulados de la *buena fe*, pues se hace necesario que el juzgador realice un estudio de la conducta asumida por el empleador, valorando además el haz probatorio para determinar de forma valedera la presencia de ella, o por el contrario llegar a la conclusión que se estuvo desprovista de ella.

Ajuicio de la Sala, en este caso no se vislumbra una conducta patronal revestida de buena por lo siguiente:

¹ CSJ SL, 24 abr. 2012, rad. 39600, CSJ SL9156-2015, CSJ SL1430-2018 citadas en sentencia SL3345-2021 Radicación n.º 60656 del 7 de julio de 2021 y SL1639-2022 Radicación n.º 85577 del 11 de mayo de 2022.

El contrato de trabajo referido en los fundamentos facticos de la acción terminó el 2 de febrero de 2014. Al contestar la demanda indicaron los accionados:

“no se le ha cancelado la suma total de la liquidación, no es por la negligencia de la empresa MANGLARES S.A.S., (...) sino por el contrario por la mala fe del trabajador que nunca fue a reclamarla al sitio de pago, y donde estuvo por más de tres meses como lo probamos con la certificación que expide el Establecimiento de Comercio denominado la casa de Cambio, lugar donde se hace efectivo el pago de cada trabajador (...) los dineros que manifiesta el demandante se le adeudan permanecieron a su disposición para ser cobrados como siempre lo hizo, esto es, en el lugar de pago establecido por la empresa y que corresponde al establecimiento de Comercio La Casa de Cambio, en Envigado. (...) Otro hecho que demuestra que el dinero estuvo a disposición para ser cobrado es que el demandante aporta la liquidación de prestaciones sociales que la empresa elaboró y puso a su disposición, pero que manifestó no cobrar, que lo haría inmediatamente terminara de trabajar con la empresa que actualmente labora puesto que no le daban el permiso para hacerlo”.

En el interrogatorio de parte indicó el demandante que le pagaban el salario catorcenal de viernes a viernes, le cancelaban en vale, iba al cambiadero y allá le entregaban el dinero con el vale, del sueldo le descontaban por el vale. Lo anterior se acredita con la certificación del 16 de septiembre de 2015 de la “LA CASA DEL CHEQUE”:

Envigado, Septiembre 16 de 2015

LA CASA DEL CHEQUE

Establecimiento De Cambio De Cheque Y Pago De Nomina
Ubicado En La Calle 37 Sur H- 43 -21 Envigado

CERTIFICAMOS

Que el señor RUBEN DARIO DIAZ DIAZ, identificado con cédula de ciudadanía N² 98.455.023, representante legal de la CONSTRUCTORA MANGLARES S.A.S., deposita en nuestra empresa catorcenalmente el dinero de nómina, la cual nosotros pagamos a sus respectivos empleados.

El pasado 30 de abril de 2014, devolvimos al señor RUBEN DARIO DIAZ DIAZ, identificado con cédula de ciudadanía N² 98.455.023, representante legal de la CONSTRUCTORA MANGLARES S.A.S., con el mensajero los vales que no habían reclamado entre ellos el vale N- 174 a nombre del señor OSCAR DE JESUS GOMEZ MARUÑLANDA, identificado con cédula de ciudadanía N⁵ 70.927.830, por valor de \$ 331,350 trescientos treinta y un mil trescientos cincuenta pesos, después de descontado el 2 % del respectivo cambio.

Si desea ampliar esta información será atendida en nuestro número telefónico 27656904.

Atentamente,


JUAN JAIRÓ LONDOÑO
C.C. N2 70.545.996

Según afirmación de los demandados, no pagaron las prestaciones sociales al demandante por cuanto este nunca fue a reclamarlas al sitio de pago, esto es, a la casa de cambio, argumento que resulta insuficiente para acreditar la buena fe, más cuando el artículo 138 del CST al regular el lugar y tiempo de pago de salarios, los cuales generan las prestaciones sociales, estipula que “Salvo convenio por escrito, el pago debe efectuarse en el lugar donde el trabajador presta sus servicios, durante el trabajo o inmediatamente después de que este cese”.

Por su parte 139 ibídem establece que el “salario se paga directamente al trabajador o a la persona que él autorice por escrito”, sin que en este caso obre prueba que el demandante autorizó el pago de sus salarios y prestaciones sociales a través de una casa de cambio, en la que, en su detrimento, se le descontaba el “2% del respectivo cambio”, contraviniendo el empleador las disposiciones legales citadas en cuanto a dónde y a quién debe pagarse el salario y prestaciones sociales.

Tampoco es de recibido lo argumentado por los demandados respecto a que no pagaron las prestaciones sociales al finalizar el vínculo laboral porque el demandante no se presentó a cobrar, pues el artículo 65 del CST, modificado por la Ley 789 de 2002 es claro al indicar que “si el trabajador se niega a recibir, el empleador cumple con sus obligaciones consignando ante el juez de trabajo y, en su defecto, ante la primera autoridad política del lugar, la suma que confiese deber, mientras la justicia de trabajo decide la controversia.”. Obligación que no cumplió el empleador oportunamente, incluso, pese a notificarse de la demanda el 10 de septiembre de 2015², solo vino a consignar las prestaciones sociales de su ex trabajador el 8 de octubre de 2015 ante el Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de Medellín³, conducta que no demuestra la buena fe pues al terminar la relación laboral el 2 de febrero de 2014 tardó más de un año y 8 meses para pagar lo que legalmente le correspondía al demandante, sin justificación razonable de carácter legal.

Nótese como la legislación laboral regla un procedimiento claro para los casos, que como el que alega la parte demandada, el trabajador se siega a recibir el pago de sus derechos sociales, negativa que puede ser expresa ora tácita, esto es en este

² Fl.16

³ Fl.36

último caso cuando el empleado omite acudir por las sumas sus acreencias de carácter laboral.

Otra razón adicional que no demuestra una conducta patronal revestida de buena fe en el transcurso de la relación laboral, lo constituye el hecho que los demandados negaron el salario de \$37.350 diarios informado en el hecho 8° de la demanda. Sin embargo, contradictoriamente lo aceptan al indicar que “si se generó la liquidación, en mención y que reposa dentro de las pruebas de la demanda”, la cual efectivamente da cuenta del salario alegado por el demandante:

CONSTRUCTORA MANGLARES S.A.S
900,539,927-1
CONTRATISTA M.O.

LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES

Obra:
Trabajador:
Fecha de ingreso:
Fecha de retiro:
Dias:
Salario dia promedio:

ROMA
OSCAR DE JESUS GOMEZ MARULANDA
23/12/2013
02/02/2014
40
\$ 37.350

C.C.
70.927.830

Cesantias = (3 * dias laborados * salario) / 30
\$ 149.400
Intereses de cesantias = (0,12 * dias laborados * cesantias) / 360
\$ 1.992
Vacaciones = (15 * dias laborados * salario) / 360
\$ 62.250
Prima de servicios = 15 * dias laborados * salario / 180
\$ 124.500
Subtotal
\$ 338.142
Otros pagos y deducciones
\$ 0
\$ 0
Total pagado
\$ 338.142

Por medio de la presente declaro haber recibido el valor de esta liquidacion de prestaciones sociales, por el tiempo servido en la obra antes anotada; dando asi por terminado el contrato de trabajo por, quienes reciprocamente se declaran a paz y salvo por todo concepto.

El Patrono
C.C. _____

El Trabajador (Recibi conforme)
C.C. _____

Como si fuera poco, pretenden demostrar que el salario del demandante era el mínimo legal porque así aparece en la historia laboral de Porvenir, cuando lo que ello solo denota es que incumplieron la obligación de cotizar sobre el salario realmente devengado por el demandante y que aparece en la anterior liquidación, que fue reconocida en la respuesta a la demanda.

Luego, no se advierte que el empleador hoy demandado haya obrado con lealtad, rectitud y honestidad de cara a su trabajador a la terminación de la relación laboral, contrario sensu, es evidente que con su conducta vulneró sus derechos laborales pretendiendo obtener ventajas o beneficios.

Además de no observarse buena fe por parte del empleador en el desarrollo del contrato de trabajo, no puede pasarse por alto la inasistencia de los accionados a la audiencia del artículo 77 del CPT y de la S.S, en la que tuvo la oportunidad de conciliar con su ex trabajador, por lo que se le aplicaron las consecuencias legales por la inasistencia a dicha diligencia.

El empleador conocía la existencia de la deuda laboral con su extrabajador, conoció que se encontraba pendiente el pago respectivo, y ante existencia de ley que daba solución a la manera como debía proceder, omitió hacerlo, por lo que se itera su conducta no estuvo provista de la buena fe.

Todo lo anterior, lleva a que contrario a lo afirmado en su impugnación no se hace posible la presunción de buena fe pregonada en la alzada.

Bajo el contexto anterior, ha de indicarse que la prueba aportada al proceso y valorada a la luz del artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el cual le concede al Juez del Trabajo la facultad de formar libremente su convencimiento, y le permite establecer su juicio sobre los hechos debatidos en el proceso con las pruebas que más lo convenzan atendiendo a los principios que orientan la crítica de la prueba, permite concluir que no si existen razones serias y atendibles que justifiquen la conducta de los demandados al no pagar oportunamente las prestaciones sociales al demandante, siendo evidente que tal conducta asumida por el empleador estuvo desprovista de buena como lo concluyó la *a quo*.

Dado lo anterior, se confirmará la sentencia.

En lo demás se dejará incólume la providencia al no haber sido objeto de recurso.

Costas en estancia instancia a cargo de la parte demandada, por resultar vencida con la formulación del recurso de apelación. Se fija como agencias en derecho la suma total de \$670.059, a cargo de los demandados dividido en partes iguales, y en favor del demandante, conforme al Acuerdo 1887 de 2003, vigente al momento de presentación de la demanda⁴.

En mérito de lo expuesto, la **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la decisión que se revisa en virtud del recurso de apelación presentado por la parte demandada, conforme a lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: Costas en estancia instancia a cargo de la parte demandada. Se fija como agencias en derecho la suma total de \$670.059, a cargo de los demandados dividido en partes iguales, y en favor del demandante, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: Lo resuelto se notifica por **EDICTO**.

Se ordena regresar el expediente al Juzgado de origen.

Los Magistrados,

Jaime Alberto Aristizábal Gómez

John Jairo Acosta Pérez

Francisco Arango Torres

⁴ 28 de mayo de 2015, según acta de reparto fl. 1

Firmado Por:

Jaime Alberto Aristizabal Gomez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

John Jairo Acosta Perez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Francisco Arango Torres
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **7fc7b01d719b82520f3829d72344127773968ab41e99ea4a796b9a6f4854f9fc**

Documento generado en 26/01/2023 01:55:34 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>